



RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes



Universidad
Nacional
de Quilmes

Zermeño, Sergio

Actores sociales y política en el México transnacional



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Zermeño, S. (1995). *Actores sociales y política en el México transnacional*. *Revista de ciencias sociales*, (2), 69-106. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1365>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

Actores sociales y política en el México transnacional *

Sergio Zermeno **

El hecho de que nosotros hayamos decidido confiar nuestra vida y libertad, tanto en los trayectos de ida y venida como en la estadia en el lugar del diálogo, a las ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES es porque hemos visto en ellas el futuro al que aspiramos.

Un futuro en el que la sociedad civil con su fuerza de justicia verdadera haga innecesarias no sólo las guerras sino también los ejércitos, y un futuro en el que los gobiernos, cualesquiera que sea su tendencia política, tengan por encima de ellos la vigilancia constante y severa de una sociedad civil libre y democrática.

**Carta del
Comité
Clandestino
Revolucionario
Indígena-
Comandancia
General del
Ejército
Zapatista de
Liberación
Nacional, a las
ONGs, 20 de
febrero de 1994.**

I Lo que dice este epigrafe ha sido repetido en muchos otros comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y hay que tomarlo con seriedad. Tenemos que evaluar con todo cuidado las verdaderas potencialidades de esa sociedad civil en que los zapatistas ven una esperanza de redención para los mexicanos y para la democracia en México, comenzando por los grupos indígenas

* Ponencia actualizada, leída originalmente en el XIIIth World Congress of Sociology, Comité de Investigación sobre Movimientos Sociales en América Latina: "El reto de los cambios sociopolíticos y económicos". Coordinador Manuel Antonio Garretón. Bielefeld, Alemania, 18-23 de julio de 1994.

** Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

**Democracia,
ajuste
económico y
sociedad civil**

que se sienten al borde del aniquilamiento por su marginación, por su pobreza extrema, por su declarada inutilidad frente a la globalización y el TLC, y que han preferido la muerte violenta antes que la inanición. Todo esto nos exige reflexionar, porque mientras ellos ven en nosotros ciudadanos organizados de la sociedad civil, una esperanza futura, nosotros vemos en el levantamiento chiapaneco también una esperanza de cambio, de relajamiento de la dominación estatal, de participación de la sociedad civil. ¡Qué paradoja!

En esta ocasión se nos propone razonar sobre los mecanismos que han permitido que regímenes autoritarios hayan podido ser sustituidos por formas más democráticas, al menos en lo que respecta a los mecanismos formales de la representación, en un periodo de reajuste económico caracterizado por una creciente desigualdad social: ¿cómo se mantiene un orden basado en una *democracia política* cuando la creciente desigualdad nos aleja de la *democracia social*? Se nos propone entonces indagar sobre lo que ha pasado y pasará con la relación estado-sociedad en los últimos treinta años del milenio y se nos sugiere privilegiar la perspectiva “desde abajo” de esta relación: las transformaciones desde lo social, ¿qué ha sucedido con los movimientos sociales? En esa medida nos parece que la apreciación del zapatismo *constituye* un buen punto de partida. Comencemos entonces preguntándonos por la sociedad civil mexicana con una perspectiva un poco más amplia, por ejemplo a partir del ‘68, que es el evento cuyos 25 años estábamos conmemorando cuando nos despertaron los indígenas insurrectos (pedimos disculpas por un acercamiento al caso mexicano demasiado *particularista* en el apartado II sobre las movilizaciones sociales, pero la perspectiva “desde los movimientos sociales” hace necesario este rodeo).

Creo que la siguiente idea puede guiarnos: los años que estuvieron alrededor del ‘68, los sesenta y los setenta, nos presentaron un panorama sociopolítico en el que los actores de nuestra modernidad vivieron su mayor embarneamiento, o, digamos, su menor debilidad.

En efecto, situándonos al margen de la moda posmo-

derna, nos parece pertinente afirmar que en esos dos decenios México vio surgir los movimientos obreros de mayor autonomía, las protestas con más consistencia venidas de las clases medias (el '68 en su centro), y las mayores afrentas al vértice estatal desde los fortalecidos grupos burgueses nacionales y regionales.

Sin pretender hablar de causalidad, ni de "agudización de contradicciones", lo cierto es que el movimiento ferrocarrilero de fines de los cincuenta, con sus presos políticos (Vallejo) reivindicados por el sesentaiocho, expresa la misma necesidad de autonomía que la Tendencia Democrática de los electricistas con Rafael Galván y que el vigoroso sindicalismo independiente de los setenta; de igual forma, el movimiento del magisterio con Otón Salazar reivindicaría la autonomía organizativa y política que caracterizaría al movimiento médico del '65, a los movimientos estudiantiles a lo largo de aquel decenio y al sindicalismo universitario de trabajadores y académicos que fuera la nota preponderante de los setenta; qué decir, en fin, de la toma de distancia anticistatal y la casi confrontación que el empresariado y la derecha escenificaron en contra del presidente Luis Echeverría (1970-1976) a mediados de los setenta y que hicieron posible aquellos titulares periodísticos y académicos como: "Los empresarios frente al Estado", o, incluso, "Los empresarios en el Estado".

Es cierto que en muchas ocasiones el discurso político-ideológico de estos movimientos ocultaba su manifestación más importante: el embarnecimiento de los actores colectivos sociales, la mayor densidad societal, digamos, en un país cultural e históricamente de predominancia estatal. En el dramático movimiento estudiantil de 1968 coexisten tensionadas dos orientaciones: la culturalista societal, alimentada por el mayo francés, la revuelta generacional, la liberación sexual y el antiburocratismo y antiautoritarismo de los movimientos juveniles de los países desarrollados, a través de la música y el cine, por un lado, y, por otro, su manifestación más vertical, propiamente política, preocupada por la organización, las representaciones legítimas, las alianzas estratégicas con campesinos y obreros, la conformación del Consejo Nacional de Huel-

**Estado
y actores
sociales**

ga (CNIH) y sus comisiones en multiplicación, el politburó ante la inminencia de la represión y, en fin, todo aquello que "politizaba" al movimiento y que por momentos lo hacía aparecer tan piramidal como a su adversario (a ello cooperaba, sin duda, nuestra cultura estatal y el marxismo-leninismo que constituía, sobre todo en aquel momento, la corriente hegemónica en las carreras sociales y humanísticas universitarias).

Modernización y modernidad

Pues bien, lo que aquí afirmamos es que el fortalecimiento social que se vivió en aquellos dos decenios, nuestro mejor acercamiento a la modernidad, digamos, y del que el movimiento estudiantil fue la manifestación mejor lograda, sería totalmente modificado a lo largo de los años ochenta y noventa. Nuestra modernización salvaje, podría afirmarse, está acabando con nuestra endeble modernidad. Tenemos así un México modernizador, el *México transnacional* llamémoslo; junto a él, un *México moderno* en desmantelamiento; más abajo de ellos en términos de ingreso y participación se extiende enorme un México que hemos llamado el *México roto* y que vamos a describir en este ensayo; y tenemos, en fin, nuestro *México profundo*, bien descrito por el antropólogo Guillermo Bonfil, el México que se rebeló en Chiapas echando mano de sus raíces para confrontar un futuro de mayor descomposición sabiendo que nada puede ofrecer al México transnacional. Regresaremos sobre este esquema al final del ensayo. Ahora detengámonos en lo referente a nuestra modernidad y veamos cómo el '68 se desparramó sobre la sociedad mexicana fortaleciendo su independencia frente al estado, aunque ya sin cabeza ni unidad.

El movimiento estudiantil

II Si dejamos de lado a la guerrilla de los setenta por haber sido cortada de tajo en los últimos años del echeverriismo (1970-1976), como nos lo han recordado Carlos Montemayor (1991) y Hector Aguilar Camín (1991), dos fueron las derivaciones del movimiento estudiantil:

Sindicalismo

1) La mejor conocida y la que tuvo mayor visibilidad fue naturalmente la sindicalista. Desde el inicio de la campaña presidencial, Luis Echeverría entró en fricciones con

quien encabezaba y encabeza aún la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), el hoy nonagenario Fidel Velázquez, y ello abrió un espacio muy valioso para los sindicatos en busca de independencia frente a la pesada pirámide corporativa del cetemismo. Arrancaron seis años de fomento a la insurgencia sindical con énfasis en los lastimados centros de educación superior, con la UNAM al frente. Viene al caso recordar que la "forma" sindicalista de hacer política fue una modalidad impuesta desde lo alto más que una elección de las dirigencias político-académicas surgidas del '68. En efecto, en el año '71, al ser liberados los presos políticos de aquel movimiento manifestaron su interés por crear organizaciones y partidos políticos. Ahí comenzó Heberto Castillo las primeras versiones del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y se fundó la Organización Revolucionaria Punto Crítico. Sin embargo, por las razones descritas, y porque el monopolio de las representaciones no permitía en aquel entonces otorgar legitimidad ni siquiera al Partido Comunista Mexicano, los espacios que a fortiori tenían que abrirse a la participación de aquellos convulsionados actores sociales quedaron restringidos a los terrenos más básicos, más sociales, del sindicalismo.

2) Pero esta efervescencia de la acción en lo social fue más auténtica en el segundo caudal en que desbordó la olla hirviente del '68: "ir al pueblo", salir de las universidades para irse a vivir entre los pobres, oírlos, organizarse en torno a sus necesidades, construir el partido desde ahí abrazando la "línea de masas" en la forma mostrada por el maoísmo. Aunque al principio unos plantearon ir a las zonas obreras y otros sobre todo al campo ("cercar a las ciudades"), fue sin embargo en las áreas urbanas, en las colonias populares de reciente asentamiento y en las invasiones de terrenos para vivienda, donde encontraron una mejor respuesta (Núñez, 1990; Bennett, 1993; Boucher, 1990; Zermeño y Cuevas, 1992). Desde el año 1969, la sección Ho Chi Minh en el medio obrero de la Ciudad de México, la Organización Regional Compañero y Política Popular decidieron posponer la formación partidista en favor de las organizaciones de masas en provincia. Fueron fun-

Organizaciones de base

dados entonces el Comité de Defensa Popular (CDP) de *Durango*, la Unión Ejidal Valle de Banderas en *Nayarit*, el Frente Popular Tierra y Libertad de *Monterrey*, con más de veinte colonias, el Frente Popular de *Zacatecas*, la Colonia Francisco Villa en la ciudad de *Chihuahua* —desde donde se organizó con electricistas y ferrocarrileros la defensa popular (CDP) en ese estado—, la Unión de Uniones en los recientes asentamientos campesinos y de indígenas desplazados en *Chiapas*, la Coalición de Ejidos en el Valle del Yaqui, en *Sinaloa* y *Sonora*, expropiados al final del sexenio ccheverriista, los ejidos de La Laguna y la zona industrial de Monclova en *Coahuila*, San Miguel Teotongo y la Unión de Colonias Populares en el Valle de *México*. Se trató de una efervescencia de lo social, de ir a las bases, lo que no estuvo exento de una sobreideologización y sobrepolitización: existían las corrientes más “puras” que no despegaban su enfoque de los actores “protagónicos” de la historia y de la esfera de la producción (el cerco a la ciudad desde el campo o, cuando eso resultó una utopía, el control obrero del corazón productivo bajo las directrices organizadas y centralizadas en una élite). A pesar de ello no predominó la Línea Proletaria (LP) sino la Línea de Masas (LM): una mayor descentralización con respecto a la estructura proletaria, la insistencia en que los movimientos basados en las colonias eran el corazón mismo de la “actividad revolucionaria” y no un complemento de ninguna esfera productiva. Así, la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM), al dar primacía a las organizaciones populares y a lo local por sobre la actividad partidista, se mantuvo más cerca de su perfil maoísta original, a diferencia de OIR-LP, y encontró sus alianzas naturales en el movimiento urbano popular, destacando su articulación con la Unión de Colonias Populares (UCP) de la capital y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Hacia el fin de los setenta, sin embargo, con el auge electoral partidista generado por la Reforma Política del secretario del Interior Jesús Reyes Heróles (quien llamó a todas las fuerzas políticas, incluidos los comunistas, a organizarse en partidos electorales legales), se planteó inevitablemente la necesidad de desplazarse desde los movimien-

tos locales hacia la organización de un frente que pudiera articularse, con el correr del tiempo, con la "forma" partido (no necesariamente electoral). La Coordinadora Nacional de Movimientos Urbanos Populares (CONAMUP) aparece en el centro de una nueva época en la que proliferan los frentes, las coaliciones, las alianzas, las coordinadoras... Una especie de nueva ola hacia el centro y hacia arriba que va a verse reforzada por el terremoto del '85 en la capital del país y por el ascenso del fenómeno cardenista (1977) y su poderoso magnetismo hacia la acción político-partidaria. El movimiento urbano popular nucleado en la coordinadora nacional (CONAMUP) se disloca y prácticamente desaparece en esta espiral centralizadora de los ochenta, y el gran movimiento maoísta, hacia lo social, del decenio anterior, se repliega en lo que fueron sus bastiones más importantes del norte del país. Al organizar posteriormente el Partido del Trabajo (PT) y gerenciar los importantes fondos que el presidente Salinas —vía PRONASOL— les otorgaría con la condición de mantenerse deslindados del cardenismo, estos grupos intentarán defenderse, en alianza táctica, de lo que es característico de los últimos veinte años de nuestro siglo: el desmantelamiento de lo social, el vaciamiento hacia arriba y hacia abajo de los espacios organizativos e identitarios intermedios entre el individuo atomizado, sin identidad, y el liderazgo presidencial paternalista.

Tenemos pues una primera fuga hacia lo alto, producto natural de la Reforma Política y del lópez-portillismo (1976-1982), que consideran que la "forma sindicato" de hacer política y la mezcla entre los universitarios y el pueblo genera una alteridad inconveniente, mientras la "forma partido" (partidista-parlamentaria) sería mucho más acorde, mucho más moderna y, fundamentalmente, fomentaría una oposición más moderada al tensionar y confrontar acción social y acción política, movimiento social y protagonismo parlamentario, base y dirigencia. Durante todo el lópez-portillismo y parte del sexenio delamadrídista (1982-1988), en el nivel nacional y no sólo en las universidades, será muy fuerte la tensión entre participar en la política partidista legal o permanecer en la base de los

**Desorganiza-
ción social,
partidos
políticos y
movimientos
sociales**

movimientos. Veremos en muchos casos un reagrupamiento defensivo de los movimientos y de las luchas sociales en coordinadoras, uniones, frentes, etcétera.

III Pero el debilitamiento de las identidades colectivas y de las intermediaciones no responde sólo a un acto desde arriba, desde el autoritarismo estatal: a partir de entonces, el desmantelamiento de la sociedad será resentido sobre todo "desde lo bajo": por la masificación demográfica que hacia el final de los setenta modificará de manera rotunda el panorama urbano y se enlazará dramáticamente con el total estancamiento económico de los años ochenta, la debacle petrolera y el fin de los recursos públicos y de los "préstamos dulces".

**Crisis
económica y
atomización
social**

Como lo hemos establecido en otra parte (Zermeno, 1989 y 1993), quedó poco de esa sociedad y de esos actores que durante los sesenta y los setenta podríamos calificar de relativamente embarneados, de manera que quienes tuvieron que actuar y hacer política en el nuevo panorama se encontraron con un entorno bastante desordenado, en vías de informalización y pauperización (durante los ochenta la caída del mínimo salarial fue del 40% y el crecimiento de la economía informal alcanzó a la mitad de la mano de obra). Esto significó, en un país cuyo PNB había crecido al 6% en los últimos treinta años, una conmoción. Como lo han establecido algunos economistas latinoamericanos: América Latina creció, en el momento de su "despegue" (1950-1980), a una tasa del 5,5 %, mientras que los Estados Unidos (1870-1906) lo hicieron al 4,8% (Tokman, 1987). Pero a diferencia del resto de la región, México no sólo no moderó la tendencia durante los setenta, sino que atizó la caldera del crecimiento en su flamante rol de país petrolero. Para una sociedad que prácticamente había cambiado a su población del campo a la ciudad en cuatro décadas, el impacto de todo este impulso contra el muro del estancamiento que significaron los años ochenta fue catastrófico. No nos parece exagerado ilustrar la "pedacrería social" resultante con los datos de José Luis Calva cuando nos recuerda que la creación de

empleos en el país fue de sólo 1.3 millones entre 1982 y 1990, contra 1.2 millones de jóvenes que se incorporaron cada año como demandantes de trabajo, lo que hasta ese momento había creado una reserva de 8 millones de personas que no fueron absorbidas por el mercado de trabajo, estimándose que un porcentaje cercano a la mitad estaría en los Estados Unidos en forma ilegal (Calva, 1991).

Sin embargo este gran desorden no es producto solamente del descontrol demográfico, del pasaje abrupto de lo tradicional campesino a lo moderno urbano y de la industrialización excluyente, de la crisis de estancamiento y de la marginación. Se explica también y cada vez más por nuestro proceso de integración transnacional, la caída abrupta de los aranceles y la norteamericanización de México a partir de la entrada al GATT en 1986. Lo que fue difícil construcción de una burguesía nacional en expansión durante la etapa sustitutiva de importaciones y de crecimiento hacia adentro, se convirtió en lo contrario: concentración en menos de doscientas firmas transnacionales con una modernización vuelta hacia afuera: ser competitivo en el plano mundial en menos de un sexenio o morir (destrucción en consecuencia de lo que alguna vez se llamaron clases sociales nacionales). Pero olvidemos los grandes nombres de la etapa sustitutiva; lo que resulta más dramático en este enfoque es la destrucción del empresariado intermedio: 70 mil medianas y pequeñas empresas desaparecidas en menos de ocho años, una de cada dos que existían, sabiéndose incompetentes más de la mitad de las restantes. De la consistencia del otro actor fundamental de la industria poco se puede decir: reducción cuantitativa de los obreros del centro del país, desaparición *de facto* y sin protestas del derecho de huelga, migración de la gran industria al norte incorporando a un proletariado más joven, menos escolarizado y sin tradición obrera ni organizativa y, en la maquila, crecimiento espectacular de 100 mil a un millón de obreros entre 1980 y el año 2000, cuando representarán el 33% de la población manufacturera (mujeres en un 75%, en su gran mayoría entre 15 y 25 años de edad, con bajísimos índices de sindicalización, nulos derechos laborales, salarios cercanos

**Globalización
económica y
clases sociales**

al mínimo y gran inestabilidad en el empleo). Recordemos en fin que entre cinco y quince millones de *campesinos* podrían ser afectados en el próximo decenio dependiendo del fin de los subsidios y la entrada de granos básicos a precios muy reducidos (maíz y frijol fundamentalmente).

Agroindustrialización y desaparición del ejido en el Norte, y en el Sur, migración, autoconsumo defensivo y atraso en ejidos y comunidades sin ningún atractivo para el capital, comienzan a ser las características de la nueva etapa en el agro (este escenario los zapatistas han demostrado tenerlo más claro que cualquier analista académico).

La
modernización
latinoamericana
desde la
perspectiva de
las Ciencias
Sociales

IV Pero México no es un caso aislado en esta trayectoria de desordenamiento sociopolítico. Si repasamos rápidamente el marco conceptual con que las ciencias sociales han analizado a América Latina en los últimos treinta años veremos las coincidencias: una vez que la llamada teoría de la dependencia, con Cardoso y Faletto, puso en claro que nuestras economías se desarrollaban a pesar de su creciente articulación con la economía mundial, la preocupación central se desplazó de afuera (imperialismo, dependencia...), hacia el plano doméstico, y de la economía a lo social; comenzó entonces la euforia por caracterizar la estructura de clases: existía la esperanza de que con el desarrollo se conformaran actores nacionales centrales, verdaderas clases en el sentido decimonónico europeo, y las ciencias sociales pasaron un buen rato tratando de responder a la pregunta sobre si lo que estaba en la periferia era o llegaría a ser de la misma materia que lo que se encontraba en el centro, y sobre el problema en torno a la potencialidad revolucionaria de los pobres urbanos. En el fondo, una especie de patente garantizaba, en el "imaginario conceptual" de los latinoamericanos, nuestra entrada inexorable al reino de Occidente, algo así como un proceso de modernización irrefrenable. Nos lo recuerdan conceptos tan ordenadores de la sociedad como lo fueron los de modo de producción, articulación de modos de producción, diacronía, sincronía, tránsito, clases fundamentales, clases subalternas, clases apoyo, gran industria, estructura,

superestructura, dominancia, predominancia, etcétera.

Muy pronto se hizo evidente sin embargo que en las sociedades en tránsito, como se las llamaba, los agentes dinamizadores no eran los actores en el terreno de lo social (las clases, si se quiere), y llegó la euforia por estudiar el estado y a Gramsci. Si dirigimos la mirada hacia esa otra gran corriente del análisis latinoamericano que se centró en los movimientos sociales también se desdibujaron los actores y los escenarios: de la euforia por analizar el movimiento obrero derivamos hacia el estudio de las potencialidades revolucionarias de la masa marginal, y de ahí nos interesamos por las manifestaciones defensivas que proliferaron durante las dictaduras militares y la crisis económica de los ochenta. Es decir, de la lucha de clases a los movimientos sociales, a las luchas históricas para rematar en el estudio de las "identidades restringidas" en movimientos urbanos, derechos humanos, comunidades eclesiales, sindicatos, juventud, mujeres...

Ante la fragmentación, la desarticulación y la heterogeneidad de los actores históricos, de las clases modernas y de las manifestaciones políticas en un escenario latinoamericano golpeado, al mismo tiempo, por las dictaduras y la severidad de la crisis económica, las visiones de reclutamiento defensivo, identidad restringida y, en una palabra, las *visiones en torno a la comunidad*, son los ordenadores éticos y conceptuales con que los latinoamericanos comenzamos a pensar nuestra realidad en el pasaje de los setenta a los ochenta.

Sin embargo, avanzados los años ochenta, el asunto se vio despojado incluso de su dimensión humanista y solidaria para recrearse en un sombrío escenario desmedidamente negativo. La imaginación en torno a la comunidad fue sustituida por conceptos que derivan de investigaciones más cercanas al medio marginal y que nos hablan de anomia, decadencia, destructividad, desintegración, caos, negatividad, antisocialidad, deterioro...

Anomía social

Si dejamos de lado la teorización en torno al "tránsito a la democracia" y su optimismo infundado, parece ser cierto que en América Latina están resultando más pertinentes, hoy, los conceptos inspirados por Durkheim, Tocque-

ville o Gramsci referentes a la disolución de la cohesión social, a la desintegración de identidades intermedias y a la particularización, o, digamos, al repliegue en la esfera individual y atomizada de los miembros de una sociedad: hablar de los excluidos es hablar de la mayoría y, en esa medida, lo marginal ha regresado como un concepto de preocupación central. Debemos hacer referencia, paradójicamente, a "la centralidad de los marginados", siguiendo el consejo del peruano Matos Mar.

Fortalecimiento estatal y fragmentación identitaria

VA lo anterior se agrega un fenómeno desarticulador muy característico de nuestro país pero sobredimensionado en el presente. En efecto, desde el momento en que los regímenes de la llamada "transición a la democracia" aceptan abiertamente que la reconversión, la globalización y el libre comercio exigen políticas de ajuste que implican la exclusión y pauperización de enormes masas durante una etapa que "puede ser larga", aceptan al mismo tiempo que atravesarán por periodos de inestabilidad peligrosos para el modelo en su conjunto (Brasil, Venezuela...). En tales condiciones, y con la certeza de que relanzar el crecimiento es el "fin" buscado a toda costa, se justifica el *actuar preventivamente desalentando, o francamente desmantelando, la constitución de identidades sociopolíticas alternativas* y de espacios públicos de interacción comunicativa que puedan volverse inmanejables o exigir del estado compensaciones y subsidios que malogren la agilidad que el reordenamiento requiere. Ello ha empujado a redoblar lo que ha sido un rasgo histórico del autoritarismo mexicano: la destrucción de todo aquello que cobre alguna fuerza independiente del control desde el vértice estatal.

Pero, en la medida en que la democracia se vuelve una exigencia de los organismos mundiales en la era de la globalización, el desmantelamiento desde lo alto se ha convertido en una finísima especialidad de destrucción de espacios e identidades colectivas sin el empleo manifiesto de la violencia, una habilidad para desmantelar la *democracia social* manteniendo una *democracia política* cada vez

más encerrada en espacios restringidos, cupulares, cerrados por el fraude electoral: un juego partidista y parlamentario hiperpublicitado por los medios de comunicación, cuando así conviene, para recrear la imagen de que alguien vigila los intereses ciudadanos allá arriba.

Algunos ejemplos de esta ingeniería del desmantelamiento social serían: 1) *la ruptura del PAN*, debido a los costosísimos compromisos de fidelidad que el estado le impuso como condición para reconocerle sus triunfos electorales. Se tuvo que mostrar tan cerca del salinismo la dirigencia panista y renunciar tan escandalosamente a una reforma del sistema electoral, que se ha debilitado uno de los raros organismos sociales de la vida política mexicana (imperó lo más negativo de lo mexicano: la entrega, en sacrificio, del poder social a cambio del poder para una dirigencia así amansada y sometida al tlatoantl). 2) *la ingeniería electoral* para el fraude: montos económicos elevadísimos que no se comparan con los modestos presupuestos electorales de las democracias de Occidente tienen como objetivo: a) asegurar una mayoría parlamentaria a la élite gobernante permitiendo leyes expeditas y *ad hoc*, comenzando con la propia legislación electoral (los "ingenieros" pueden incluso, por mal cálculo, llegar al horrible espectáculo del monopolio político, como en el '91); b) dedicar recursos masivos para levantar un censo político de alta precisión (credencialización y mapas electorales), con fines que van más allá de lo electoral inmediato y focalizan esencialmente los puntos candentes que requieren de bombarazos PRONASOL o, en el extremo, de la acción más drástica de "seguridad" nacional; y, c) provocar el desaliento y el abstencionismo cuando los ciudadanos constatan que las opciones por el cambio y el voto opositor están negadas o se reducen sólo a la oposición "leal" del PAN, que aparece por momentos como aparato de estado junto al PRI, al PRONASOL, al clero, a los partidos títere y a Televisa. 3) *El desmantelamiento de la universidad pública* y en particular de las ciencias sociales, al abatirse los ingresos de la academia, enviando a los grandes maestros a la búsqueda de empleos suplementarios, prestigiando deliberadamente a los centros privados cuya planta académica ha

Mecanismos estatales para el desmantelamiento social

sido casi en su totalidad formada en planteles y con subsidios públicos, separando institutos de escuelas y facultades, otorgando estímulos económicos y becas con base en la fidelidad institucional, enfrentando a todos contra todos, hasta a los más prestigiados maestros, por un ínfimo trozo de estímulos monetarios. Así, el presupuesto de las universidades, en otra hora autónomas, se desglosa hoy minuciosamente desde la Secretaría de Hacienda y no existe ninguna forma de destinar fondos para relacionar horizontalmente (utopía de los setenta) sapiencia universitaria con necesidades populares o de grupos medios (el único horizontalismo que se permite a este respecto es entre los institutos de alta tecnología y la gran empresa). ¿Quién puede en estas condiciones crear una asociación para la defensa de los intereses de su gremio si no ha quedado ningún lugar intermedio, ni presupuestariamente ni identitariamente...? 4) *El control de los medios de comunicación* de masas, cuya propiedad puede privatizarse pero el contenido de sus emisiones permanece bajo estricto control a través de la contratación de publicidad gubernamental, la intromisión en la elección de directivos, la política impositiva o el veto deliberado sobre periodistas, conductores de programas radiofónicos y televisivos, etc. Para quien se muestra dispuesto a prestigiar las políticas gubernamentales o descalificar a los que las critican, van ayudas directas en monetario, programas de televisión exclusivos, propaganda de todas las instituciones federales y estatales, contratos millonarios para la producción de "obras" culturales. En el largo plazo quizás sólo ha podido escapar la revista *Proceso* y *La Jornada* con severas embestidas... 5) Finalmente, el PRONASOL resulta lo más nítido para ejemplificar este vaciamiento de las intermediaciones al ligar en forma directa la figura personalizada del presidente de la República con la diminuta y *transitoria* (sólo mientras dura la obra) asociación de ciudadanos paupérrimos allá, en lo más recóndito de la sociedad atomizada, o bien, cuando así conviene, al prestigiar a tal organización, por la que se canalizan los fondos, en detrimento de tal otra, indeseable, regularmente con más tradición, mejor asentada y con más autonomía con respecto

a la estructura de control gubernamental; o bien, se le entrega un tractor a un miembro no tan justificado de un grupo que había solicitado cinco, lo que muy probablemente provocará la confrontación de ese agregado de campesinos. Se pensaba que PRONASOL eliminaba intermediarios corruptos que en otros momentos impedían que los dineros públicos llegaran a quienes estaban supuestamente dirigidos. Chiapas puso en entredicho esta creencia quedando al descubierto que con el pretexto de eliminar intermediarios, lo que SOLIDARIDAD sí ha logrado con eficiencia es desmantelar las más auténticas organizaciones intermedias de la sociedad (de la misma manera que la crítica a la corrupción de las cúpulas sindicales terminó siendo la crítica al sindicalismo y, de ahí, la crítica a cualquier corporativismo, es decir: asociacionismo intermedio). Esto forma parte de una misma concepción desmanteladora de las defensas sociales, de la consistencia del tejido social.

Así pues, entre lo social disperso y el estado se encuentran muchas constelaciones que sufren este embate y ello se constituye en uno de los "disolventes" más poderosos, aunque no único, de lo social. En efecto, hoy podemos establecer la hipótesis de que ha habido en México, a partir de los años ochenta, un debilitamiento palpable de los órganos y espacios de mediación. Enumeremos: 1) En el *plano propiamente social* hoy podemos constatar en México y también en América Latina la crisis generalizada de los *movimientos* y las *luchas sociales*, la destrucción de la *acción sindical* y la *prohibición de las huelgas* y otras acciones directas que buscan una mínima continuidad o identidad; 2) En el *plano organizativo social con cierta institucionalización* sucede lo mismo: hay una crisis de los *frentes*, *coordinadoras*, *asambleas*, *sindicatos*, *confederaciones sindicales*, *obreras*, *agrarias*, *uniones de pueblos*, *colonias*, *órganos vecinales*, *comunidades eclesiales*, etc; 3) En los *espacios institucionalizados de lo público* como el *sistema escolar*, *universitario*, de la *cultura* y en los *medios de comunicación* en general, también constatamos el mismo vaciamiento de la participación colectiva en aras del eficientismo científico-técnico y asistimos al desmantela-

**Debilitamiento
de las
organizaciones
de la sociedad
civil**

miento de lo que alguna vez fueron los aparatos asistenciales con fuerte participación social, como el *sistema de salud*, de *abasto*, de *transporte*, de *vivienda*... 4) Las *instituciones propiamente políticas* de la sociedad: partidos y organizaciones políticas, parlamento, asambleas de representantes, cúpulas sindicales, patronales, sectoriales, grupos de interés, de presión, de opinión... Creemos que la hipótesis sobre el debilitamiento de lo público y de la sociedad moderna puede ser sustentada en todos estos terrenos.

Demanda de liderazgo y desorden social

VI Lo que debemos recordar, en fin, es que cuando las intermediaciones entre lo social y lo estatal son pobres históricamente y lo son además por el cambio acelerado, el desorden anómico, la reclusión en lo privado, la segmentación de los mercados políticos y la acción deliberada desde el estado para la pulverización de identidades, los miembros de una sociedad, sobre todo aquella gran mayoría que vive en la precariedad, se sienten aislados, solos, incapacitados para hacer frente a su situación por ellos mismos o por su grupo social en desintegración y apelan al líder como única esperanza para superar su situación desdichada. Vivimos, decíamos en un trabajo reciente, un regreso del verticalismo en lugar de un reforzamiento de lo social, y de ello se aprovechan y lo alimentan programas del gasto público encaminados al culto de la personalidad, como los programas de solidaridad tan recomendados por el Banco Mundial y el FMI para atacar los focos peligrosos de pobreza extrema y formación de identidades y acciones, aunque sea coyunturales, en el seno de lo popular.

Como consecuencia, el TLC, el proyecto globalizador y la *modernización* salvaje que los acompaña, constituyen, como lo establecíamos al comienzo de este trabajo, poderosos disolventes de la sociedad civil mexicana, de lo poco de *modernidad* que logró México durante la etapa sustitutiva de importaciones. En este contexto, el discurso en torno a la "transición hacia la democracia" y al "liberalismo social" con que se hace acompañar el régimen político mexicano

difícilmente encuentra sustento *sociológico*, teniendo que conformarse *con* magnificar la existencia de un sistema electoral, partidista y parlamentario prácticamente intervenido de manera policiaca a través del fraude, la corrupción, el fomento deliberado de escisiones, el monopolio de los medios de comunicación, etcétera.

No son pues los movimientos y luchas sociales, los órdenes comunitarios o asociativos y tampoco el sistema político en sus manifestaciones partidistas, parlamentarias, frentistas o sindicales, las esferas de expresión sociopolítica privilegiadas en este panorama desordenado: ellos son más bien los grandes perdedores.¹ Lo paradójico es que la vía autoritaria o, digamos, este renacimiento que vemos en tantas partes de la relación líder-masas parece estar constituyéndose en la forma de integración emergente para una sociedad en desmantelamiento. Y es que, en efecto, ¿desde dónde, si no desde un estado movilizador, sería posible articular manifestaciones que por momentos aparecen como atomización o individuación anómica, que amenazan también con explosiones espontáneas y radicales de violencia (¿la generalización del zapatismo?), que se refugian, cuando aún les es posible, en la comunidad y las identidades basistas, eclesiales... o que tienden en ocasiones a ser atraídas por el individualismo consumista, antiautoritario y antinacional? ¿Será que el regreso sorprendente del espectro paternalista-autoritario va a revelarse como la única "solución" de continuidad y cohesión nacionales con cierta viabilidad, y que no nos queda más que optar entre el *líder bueno*, que se aboque a la reconstruc-

**Integración
social y
liderazgo
autoritario**

¹ Como dice Tironi (1986): "El aislamiento de los individuos y la segmentación de la sociedad en grupos primarios obliga a que sea el Estado quien centralice las relaciones sociales, en particular concentrando en sus manos las comunicaciones y las decisiones colectivas. En efecto, una sociedad atomizada, carente de grupos secundarios, de asociaciones intermedias o corporaciones, en los hechos delega su unidad a la institución estatal y está inermes frente a ella. En estas condiciones, el Estado es libre para manipular a la población sin que nada amenace su independencia; todavía más, atenderá a ganar mayor autonomía profundizando la atomización de la sociedad".

**La relación
líder-masas
y la
reconstrucción
de la sociedad
civil**

ción de las identidades intermedias y los espacios colectivos de interacción, y el *líder malo* (neoliberal), empeñado en llevar hasta el final la derrota de la sociedad (civil), la pedacería, la atomización y la desidentidad en su obsesión por achicar el estado, parar la inflación, reconvertir la industria, pagar la deuda y hacernos competitivos en mercados excluyentes? Qué horror haber dicho esto hace veinticinco años, pero tenemos que aceptar que hoy no suena tan desautorizado por los acontecimientos.

Quién puede dudar de que hubiera sido mucho mejor un tipo de sociedad civil fuerte en sus organizaciones intermedias, que facilitara el engrandecimiento de la personalidad de cada individuo, la interacción en el más alto nivel de racionalidad como lo quiere Habermas, o el interés colectivo de la Polis evocado por Castoriadis, que hiciera corresponder agregados socioeconómicos con organizaciones o partidos políticos y con ideologías o proyectos de sociedad futura, como le gustaba a Touraine evocar a la modernidad clásica; que cultivara, en resumen, unas instituciones estables tanto en lo social como en el plano de las representaciones políticas. Pero lo que ha sucedido es que no nos estamos acercando ni a una democracia asentada en una sociedad civil transnacionalizada como lo quisieran *Vuelta* o el PAN (aunque fuera como resultado de la lucha conflictual de las clases), ni a una con predominancia de la sociedad política (partidos, parlamentos o grandes fuerzas corporativas), sino que la predominancia parece favorecer, en el mejor de los casos, la lógica líder-masas o estatal-popular resultado del desorden: los mexicanos, como otros pueblos del Tercer Mundo y de América Latina, nos estamos inclinando, quizás no muy conscientemente, a la búsqueda de un líder popular-nacional (Cárdenas, Camacho...). Mientras tanto, uno de cada diez habitantes juega al ciudadano, al consumidor, al elector, y Televisa quiere hacer creer al resto que para allá vamos todos con el TLC.

Si lo hasta aquí presentado fuera aceptable podríamos concluir diciendo que mientras el movimiento del '68 tuvo como entorno una sociedad en fortalecimiento, el México de la década perdida y del último decenio del siglo se ca-

racteriza por una sociedad en debilitamiento: producto del desorden, la polarización socioeconómica y la desidentidad.

En este contexto, como lo establece el zapatismo, fue alentadora la presencia de las ONG's alrededor de la Catedral de San Cristóbal para proteger las conversaciones entre el EZLN y Camacho Solís (se trató de 75 organizaciones, entre derechos humanos, mujeres por la democracia, asistencia a las víctimas, auxilio a la niñez, lucha contra la pobreza, preservación ecológica, ciudadanos por la democracia, por los derechos a la comunicación y la información, por el derecho a la alimentación, etc.), pero no dejamos de aparecer como barcos de papel en medio de la tormenta. Me pregunto y le pregunto al zapatismo si junto con la esperanza en la sociedad civil no tendríamos que plantearnos el problema de la permanencia del estado fuerte, la cuestión de cómo convivir con el monstruo y que sea posible al mismo tiempo reconstruir nuestra sociedad civil hecha pedazos.

VII Ahora habrá que aclarar un asunto: si bien la referencia al desorden es central para la comprensión de México en este fin de siglo, con ello se está intentando una caracterización de la sociedad en su conjunto, en su funcionamiento "normal", y no de sus rupturas y sobresaltos, que son naturales en todo orden social.

Por ejemplo: nuestros argumentos no están necesariamente en contradicción con el espíritu de un ensayo de Carlos Monsiváis que se titula "La sociedad que se organiza" (Monsiváis, 1987), en el que el autor se interesa por analizar el ascenso de algunas de las principales luchas sociales durante la década pasada: las organizaciones, identidades y solidaridades generadas a partir del terremoto de 1985 en la capital del país; la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) en Juchitán, Oaxaca; el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en la UNAM, etc. Es lo propio de las luchas sociales y de las situaciones extraordinarias definir un oponente, luchar en contra de él y en favor de unos objetivos que cohesionan la identidad colectiva así generada y dar la im-

presión, en consecuencia, de una gran organización. Es lo propio también de cualquier sociedad estar viendo surgir estas situaciones aquí y allá. Pero el seguimiento de tales acontecimientos no debe llevarnos a caracterizar a la sociedad global-normal con los mismos parámetros que a las situaciones de excepción en que se desarrollan las luchas sociales. Es más, de las luchas aludidas por Monsiváis poco o nada quedó del movimiento universitario (estudiantes y académicos) a partir de 1988, cuando el CEU tuvo que optar por la acumulación de fuerzas con el cardenismo, y algo no tan diferente ha acontecido con las organizaciones herederas del terremoto, que también se vieron sobrepolitizadas y sufrieron escisiones producto de las luchas electorales en 1988 y en 1994. Aceptemos sin embargo que algunas organizaciones se alejan de este vaciamiento crónico de lo social mexicano: la COCEI, que desde Cosijopi peleaba contra el vértice azteca y que hoy, a pesar de su involucramiento con el PRONASOL, no ha visto debilitada su identidad regional; los sinarquistas, que desde la Cristiana se han peleado con el estado central, destructor obsesivo de los pequeños propietarios agrarios, a lo que el navismo no ha sido ajeno, etc. Así, las organizaciones del terremoto de 1985, la Asamblea de Barrios, el CEU y el propio '88 cardenista, con su extremada "visibilidad capitalina", generaron una apariencia de gran participación, una cortina de humo en realidad que nos ha impedido calibrar el desmantelamiento de los actores colectivos en nuestro país. Hay pues una diferencia entre la activación en el corto plazo (su enorme potencialidad para definir un adversario y una identidad que aparece tan poderosa en su momento de activación coyuntural), y lo que hemos llamado el comportamiento social normal de una sociedad.

**El
surgimiento
de una
identidad
comunitaria**

Sea como sea, tenemos que responder a otra "salvedad", porque lo que ha caracterizado a México desde el año '94 no ha sido el desorden anómico y el desmantelamiento de los actores sociales, sino la aparición de una identidad colectiva bastante bien definida en el Sureste del país que parece habernos conmovido de manera mucho más radical que la lista de rupturas del orden referida anteriormente. En efecto, ante el levantamiento del Ejército

Zapatista de Liberación Nacional políticos, intelectuales, periodistas y ciudadanos hemos expresado: 1) sorpresa-incrédula; 2) condena a la violencia; 3) conmiseración por los pobres; y 4) titubeo entre considerarlo un conflicto local o el lugar mal vigilado por el que se "coló" el malestar de esa enorme mayoría de los mexicanos convencidos de que su rol en el proyecto neoliberal nunca dejará de ser el sacrificio y la espera.

La sabia postura por parte de la opinión pública de detener la guerra, la tregua acordada por el gobierno y el resultado de la primera ronda de las pláticas para la paz en la catedral de San Cristóbal de las Casas, nos permitieron una primera reflexión que hoy, con la "Segunda declaración de la selva Lacandona", tiene mucho sentido: recordábamos entonces que el patrón según el cual funcionamos los mexicanos cuando se rompe el orden nos enseña que es ridículo separar lo local de lo nacional; por más que la situación de los indios de Chiapas sea diferente a la de los mexicanos del norte, ello no anula el que una de nuestras soleras de comportamiento continúe siendo *la cargada*, que igual funciona para robustecer al tlatoani que para derrocar al gobierno: las clases ilustradas de San Luis Potosí, las gavillas del norte y los peones acasillados del sur se aliaron como un rayo contra el estado central en los comienzos de la Revolución de 1910. Inmediatamente después del levantamiento de los zapatistas de Chiapas, las organizaciones indígenas y campesinas tomaron 50 mil hectáreas sobre las que no se ha podido encontrar una solución y reconocieron al EZLN como fuerza beligerante. Estos serios peligros para la estabilidad nacional se dieron en medio de un escenario que, desde 1988, ha sido alimentado por la imposición de los gobernantes vía el fraude en Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, México, y últimamente en Tabasco, en Veracruz y en el propio Chiapas. No olvidemos tampoco que en los meses recientes se pueden constatar en el ambiente social muchas manifestaciones derivadas de esa otra solera del comportamiento de los mexicanos cuando se rompe el orden o se adivina su debilitamiento: *la revuelta plebeya*, que comienza naturalmente con la sorna, la fiesta calleje-

ra, la desobediencia, el reto, y se amplifica hacia la violencia desorganizada y la destrucción pura y simple.

En nuestra sociedad no es la semejanza en la identidad de los alzados lo que los mantiene juntos sino el compartir un mismo adversario: cuestionado éste, todo pasa a ser desorden. El principio unificador de nuestra sociedad es, por extensión, estatal y no social: es que no hemos podido construir actores sociales con cierto poder, intermedios entre el estado y los ciudadanos dispersos o las masas. Nuestras clases sociales altas, pero también las obreras y las intermedias, han sido siempre barridas por la revuelta, la guerra, los capitales exteriores, pero sobre todo por el pavor estatal y de nuestra cultura toda a convivir con el otro y a respetarlo. Por ello seguimos siendo caldo de cultivo para los levantamientos generalizados en contra del adversario estatal compartido (sobre todo cuando da visos de antinacionalismo). No vale argumentar que eso quedó en nuestro pasado campesino, primero, porque lo que está ante nuestros ojos proviene justamente de ese pasado; segundo, porque a diario vemos el espectáculo de otras sociedades que parecían mucho más cerca de Occidente, como Yugoslavia, y cuyo principio de orden quedó hecho trizas; pero, fundamentalmente, porque nuestra modernización salvaje ha demostrado ser una destructora inclemente de nuestra modernidad inacabada, de lo que más nos asemejaba a un país moderno, que no es la posesión de un teléfono celular, una videograbadora y una "personal computer" para cada mexicano de clase alta, sino la presencia de un empresariado medio robusto, hoy hecho jirones por la apertura comercial; de grupos de trabajadores con cierta capacidad de negociación (como los coreanos, por cierto); de un campesinado con alguna organización para influir en los ritmos de la apertura comercial, los subsidios y las leyes que lo conciernen (como el campesinado francés); de un sistema informativo y de opinión con autonomía frente al estado; y de un sistema electoral con, por lo menos, alguna credibilidad.

En una entrevista anterior al primero de enero de 1994 se le preguntaba al encabezado de gobernación si lo que estaba haciendo el régimen neoliberal no era la destruc-

ción deliberada y sistemática de todos los espacios de intermediación, incluido el balcanizado sistema partidista, y si eso no contradecía la sabia frase de don Jesús Reyes Heróles en el sentido de que "lo que resiste apoya" (en donde se daba a entender que espacios alternativos de crítica, de identidad colectiva y de oposición son apoyo indispensable de cualquier orden político sano); que si todo aquello, se le cuestionaba, no hundía en una especie de fango a las bases del estado. El secretario contestó que el desdibujamiento de las intermediaciones del pasado (sindicatos, organizaciones campesinas, universidades, sistema educativo, balcanización partidista...) estaba siendo sustituido por formas más modernas, y puso como ejemplo las Organizaciones No Gubernamentales y los Comités de Solidaridad. Ya no dio tiempo para replicar que esos eran organismos demasiado atomizados, discontinuos y pequeños en lo profundo de la organización social y que difícilmente llenarían el hueco enorme que se había generado entre ellos y el vértice...

Quizás por esto surge en Chiapas la ruptura: el régimen, acostumbrado a gobernar sobre la base del control extremo de los medios de comunicación y la destrucción sistemática de los espacios, actores y organismos de identidad colectiva, se distrajo en esa tarea desmanteladora: dio por sentado que las regiones del campesinado paupérrimo, predominantemente indígenas, se encargarían de su propia demolición agobiadas por el alcoholismo, los sistemas religiosos, el caciquismo con sus guardias blancas y la represión militar periódica. Se olvidó de que comunidades que mantienen estructuras de cohesión fuertemente ancladas en valores culturales y religiosos ancestrales –el México "profundo"– antes de aceptar su dislocación definitiva recurren a los fundamentos y los defienden de manera radical, es decir, con la vida. Así se explica, hoy, el vigoroso resurgimiento del fundamentalismo islámico, nos atrevemos a argumentar.

De acuerdo con esto y dentro de la matriz de funcionamiento de la acción sociopolítica mexicana, la ruptura que estamos viviendo parece ser inminentemente nacional y no sólo local. ¿Quién iba a imaginar que el México profun-

**Cohesión y
valores
ancestrales**

do estaría, a comienzos del '94, activando al México roto (los deshechos de la modernización salvaje), despertando al México bronco (plebeyo) y amenazando con triturar al México ciudadano, el de los integrados a la modernización, el de los hijos triunfantes del libre comercio y el anunciando tránsito a la democracia?

Las negociaciones entre el EZLN y el gobierno nacional

VIII El escenario chiapaneco durante el año de 1994, si hacemos abstracción hasta cierto punto de las elecciones nacionales y estatales, se planteó de la siguiente manera: el gobierno resumió su postura en el punto 8 del documento "Compromisos para una paz digna en Chiapas", donde acepta que existen unas demandas justas por parte del EZLN pero que se trata de asuntos locales, circunscritos a la cuestión indígena, y propone solucionar esos "graves problemas agrarios" promulgando una *Ley General de las Comunidades Indígenas* que permita no tocar en lo absoluto las reformas hechas durante este sexenio al artículo 27 constitucional, en las que se declara concluido el reparto agrario y se convierte la figura del ejido en un bien mercantil enajenable. El EZLN por su parte se retiró a la selva para realizar una consulta en torno a los "Compromisos para una paz digna", y regresó a la visibilidad pública hacia mediados del año '94 con un NO rotundo a las 32 propuestas gubernamentales.

Junto con esto se destinaron enormes cantidades de dinero, vía PRONASOL, con vistas a apuntalar lo mejor posible la cuestionada estructura de las representaciones políticas (dar alguna legitimidad a las tan repudiadas presidencias municipales). El objetivo fue la reconstrucción desesperada de un sistema de dominación sobre la base de: a) las clases poseedoras existentes, que han estado recibiendo una renta del gobierno mientras sus tierras estén ocupadas; b) la estructura de las instituciones políticas tal como existe hasta ahora (presidencias municipales con dinero PRONASOL); y c) las organizaciones productivistas, como ARIC-Unión de Uniones, que han intentado durante más de un decenio modernizar la agricultura de la región enganchándola al mercado internacional (proyecto debilitado en

los primeros años '90 por la caída mundial de los precios del café).

El EZLN también compitió naturalmente por inclinar a su favor las fuerzas que se encuentran en su entorno y lo logró hasta cierto punto: primeramente creó las condiciones que hicieron posible la invasión de 50 mil hectáreas, y luego unas 100 mil, en la zona de los Altos y las Cañadas, es decir, en territorios no controlados militarmente por el zapatismo; segundo, tuvo la influencia suficiente como para evitar que la Coordinadora Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC, con más de doscientas organizaciones) fuera controlada por corrientes oficiales como la CNC y la ARIC-Unión de Uniones, a pesar de que en su inicio dicha Coordinadora fue convocada e impulsada por los representantes del presidente de la República. Parece verse pues respaldada la tesis según la cual las organizaciones oficiales campesinas fueron perdiendo sus bases en favor de las corrientes que se plantearon la vía armada o, como a otros les gusta plantearlo: los padres están en la CEOIC y los hijos en el EZLN. El hecho es que cada vez con más fuerza las organizaciones campesinas e indígenas se declararon en favor del zapatismo, y no como simpatizantes sino exigiendo su reconocimiento como fuerza beligerante, lo que las ha deslindado hasta ahora del intento de manipulación oficialista.

Desde la perspectiva zapatista, durante 1994 se calculó que eran muy bajas las expectativas de llegar a unos acuerdos hacia la pacificación con un gobierno que estaba a punto de terminar. Reforzada por el asesinato de Colosio, la actitud del zapatismo fue pues de espera, pensando que un nuevo régimen, sobre todo si era cardenista, les daría una gran fuerza y legitimidad, pero incluso si el resultado electoral fuera de un empate, se encontrarían frente a un país plenamente activo y en reacomodo, muy favorable para su consolidación y su articulación con otras fuerzas opositoras. En estas condiciones, la *Segunda Declaración de la Selva*, hacia mediados del año (es decir, la negativa total a aceptar los cambios reformistas a través de inversiones PRONASOL propuestos por el presidente Salinas por intermedio de su delegado Camacho So-

**La ampliación
del conflicto a
nivel nacional**

lis] no sorprendió a nadie, pero nos permite entender por qué los conflictos, movimientos y luchas sociales en México difícilmente se mantienen en el ámbito en el que nacen, lanzándose inmediatamente al plano de toda la nación. Y es que al no encontrar *espacios o canales intermedios para hacer política* (lo que supone que la mediación camachista fue sumamente débil, discontinuada y muy mal respaldada por las acciones del presidente de la República), al echar mano del mayor número de alianzas en una búsqueda precipitada por acumular fuerzas, se apuesta a ganarlo todo o a perderlo todo, lo que conduce a desquiciar el orden en un incontrolable encadenamiento de malestares o a destrozarse contra el muro del estado; y es que más vale esto que entrar rápidamente en una dinámica de desgaste, de escisiones internas o de aniquilamiento selectivo ejercido por el Tlatoani. Entonces, en México parece operar una especie de lógica en la que un actor suicida (las luchas sociales y su dirigencia) y un actor asesino (el estado) se enfrentan, convirtiendo en catástrofe casi irremediable los momentos en que se manifiesta la acción directa de la sociedad (el '68 es el ejemplo más espectacular de esto a pesar de la modernidad de sus actores). Así, la guerrilla chiapaneca, más allá de la confrontación (que es la característica de toda guerra), se vio empujada a lanzarse a la acumulación de fuerzas a nivel nacional.

El asunto es que el conflicto no pudo circunscribirse a lo *local-indígena* en que lo quiso mantener el gobierno mexicano a juzgar por el punto 8 de los "Compromisos para una Paz Digna" (una *Ley General de las Comunidades Indígenas*), y pasó irremediablemente a plantearse como un problema *agrario-campesino* y, en esa medida, generalizable a enormes regiones del país (resultó obvio que la táctica de dilación gubernamental, de dejar morir por cansancio, no podía funcionar con una guerrilla y con las elecciones tan cerca). La cuestión es que con el auge enorme de las invasiones de tierras, pareció comenzar a vivirse en el estado de Chiapas una transmutación desde una guerra entre ejércitos (uno en las ciudades mestizas, otro en la Lacandonia), hacia una guerra entre grupos sociales (los propietarios de predios y fincas apoyados por la institucio-

nalidad gubernamental vs los invasores indígenas y campesinos de las tierras, apoyados por el zapatismo). La existencia del ejército zapatista en la selva comenzó a no ser lo más significativo y, para usar una imagen, sus soldados se despojaron del paliacate y el arma larga, "trasminándose" desde la selva hacia la lucha agraria. Así, reaparecerían en toda la región, y más allá, en su calidad de campesinos invasores o simplemente de invasores de palacios municipales, desde donde declararían la independencia de los municipios tomados y la autonomía indígena de esas regiones. Eso es lo que aconteció el día 19 de diciembre: los zapatistas tomaron cerca de cuarenta municipios en la madrugada y con ello pusieron en claro que su movimiento no era esencialmente militar sino esencialmente social y cultural. Menos de 24 horas después el peso se devaluaba en un 50%, las reservas nacionales se consumían, al ritmo que el capital internacional volaba a otras regiones del globo más estables.

Para el Ejército mexicano, sin embargo, esta transmutación sería más costosa, pues aunque al principio del conflicto sus acciones fueron de una elevada violencia contra la población civil indígena, en el nuevo escenario no le resultaría fácil tomar partido por las clases poseedoras.

La estrategia se complicó desde que no fue posible mantener el conflicto en el ámbito indígena-local, con invasiones congeladas, organizaciones campesinas divididas, soluciones "pronasolizadas" y un interlocutor acorralado (el EZLN). El "caso de excepción" (frente al modelo globalizador) en que el gobierno neoliberal quiso convertir al conflicto chiapaneco no pudo mantenerse circunscrito a una parte del México profundo (los indígenas del atípico estado de Chiapas), y corría el peligro de desbordarse rápidamente no sólo sobre el resto del indigenismo del país, sino sobre el México tradicional campesino (el México mai-cero). No se trataba más de un "caso de excepción", ya que estaríamos hablando del paso de uno a veinte millones de mexicanos.

El asunto se volvía muy complicado, porque si todos estos mexicanos se volvían una excepción, es decir no podían con el TLC y, además, el país se hundía en la crisis

**La
heterogeneidad
sociocultural
de México**

económica debido a la devaluación, el déficit de la balanza de pagos, el desmantelamiento de la industria nacional, el endeudamiento en dólares y la imposibilidad de pagarlos, entonces, lo que se estaba poniendo en cuestión era el modelo mismo de la globalización.

Aquí se hace preciso un ejercicio de reordenamiento de las dimensiones: el indigenismo que el estado mexicano quisiera convertir en excepción (sacarlo del libre juego de las fuerzas locales y del libre comercio mediante la prometeda *Ley General de las Comunidades Indígenas*) abarcaría un poco menos de un millón de indígenas chiapanecos (el 1% de la población mexicana). El *México profundo*, con fuertes referentes culturales aún anclados de manera orgánica en la tradición indígena, contaría con unos 10 millones de habitantes. Así, el *MEXICO TRADICIONAL* (I), suma del México profundo más el *México maicero* (el de ese gran campesinado deprimido y sin competitividad), estaría compuesto por alrededor de 20 millones de compatriotas. En el otro extremo podríamos hablar de un *México transnacional*, aquel que ha sido capaz de conectarse competitivamente con la globalización (restando a los trabajadores de la maquila, de la industria transnacional y de la agricultura de exportación, que distan mucho, por sus ingresos, de poder ser considerados como actores legítimos y participativos del modelo dominante). Estrictamente hablando, se encontrarían enganchados de manera activa al mundo uno de cada diez mexicanos. Naturalmente que otro 20% de compatriotas constituimos los hijos, que hoy vivimos en peligro, del *México moderno*, el de la etapa sustitutiva de importaciones, el de la industrialización y la urbanización en los decenios que fueron de la Segunda Guerra Mundial a la crisis de los ochenta. Podríamos hablar así de un *MEXICO INTEGRADO* (III), compuesto por tres de cada diez mexicanos, entre transnacionalizados y modernos: empresarios competitivos y exitosos unos, en el borde de la quiebra la mayoría; estudiantes cuyo esfuerzo formativo es inverso a su futuro laboral; obreros y empleados en pauperización y pérdida de derechos laborales, herencia del pasado; legiones de empleados con salario mínimo, capacitación mínima, organización mínima y escolaridad y

cultura mínimas. Entre el 20% del México tradicional y el 30% del México integrado se extiende, con toda su crudeza y su desorden, el *MEXICO ROTO* (III), el desarraigado, el de la modernización salvaje: los grupos sociales del modelo anterior que nunca fueron integrados por la modernidad y a los que se agregó la pedacería dejada por la "década perdida" y el shock neoliberal; las masas de la marginalidad urbana y del mercado informal (quizás uno de cada cuatro mexicanos), a los que hay que agregar los obreros de las maquiladoras y sus desordenadas familias (5% de los mexicanos para el año dos mil), así como a los jornaleros migrantes, a los habitantes de pequeñas y no tan pequeñas ciudades, que ya no son campesinos y para los que casi no hay empleo en esas economías regionales condenadas a no ser competitivas en mercados abiertos, etc., etcétera.

IX No cabe duda de que Chiapas ha venido a poner en claro que tan excepcional es el *México profundo* como el *México transnacional*, y que tan iluso es querer convertir al todo hacia un extremo como hacia el otro (sólo a los miembros del equipo neoliberal se les ha ocurrido tal idea, a nadie más). "No creo que el juego del mercado de la oferta y la demanda vaya a resolver los problemas de miseria que existen, por ejemplo, en la Mixteca oaxaqueña. Ahí tiene que haber una política deliberada del gobierno", fueron palabras pronunciadas por Luis Donald Colosio, candidato priísta a la presidencia de la república, el último día de su vida.

Al aceptarse una excepción en Chiapas (o en la Mixteca), que el régimen quiere que sea del 1% pero que en realidad involucra a por lo menos uno de cada dos mexicanos en el estatus de damnificados excepcionales, ya se perfila con evidencia la catástrofe de la utopía neoliberal: ¿cómo separar al México profundo del tradicional-campesino y del México roto? Parece claro que la cuestión chiapaneca nos obliga a repensar el modelo de desarrollo: tratar de ser competitivos en el mundo de la globalidad está muy bien; es más, cuanto más exitosos podamos resultar en ese esquema mejor será (conscientes de los sacrificios que ello

**El fracaso
del modelo
neoliberal
mexicano**

acarrea para los obreros de la maquila, la agromaquila y otros servicios adláteres). De ahí a abrir la frontera inocentemente a los productos agrícolas básicos (maíz, frijol, carne, leche...), a los servicios y a las manufacturas producidas a escala mundial (convirtiendo a nuestros empresarios en fayuqueros o solicitantes de franquicias), hay un paso muy grande si se toma en cuenta, además, que cada vez que hemos resultado competitivos en algún producto, los Estados Unidos han encontrado alguna legislación doméstica que limite tal éxito (cemento, acero, cerveza, tomate, atún...). Corea, Japón, Taiwán, Malasia o Filipinas jamás abrieron sus fronteras a la importación de arroz barato de otras latitudes durante su etapa de integración transnacional, y todavía hoy se oponen a desemplear a su nutrido campesinado. Corea y Japón cerraron sus fronteras a manufacturas de mayor competitividad durante lapsos de tiempo importantes que les permitieron reforzar esos renglones por la vía de la investigación científica en las universidades y en las empresas o, incluso, mandando a científicos a capacitarse en el exterior o trayendo a técnicos altamente capacitados en esas ramas.

Excelente carne traída del extranjero costaba la mitad, antes de la devaluación, con respecto a la carne de calidad moderada producida en Chiapas; el café —hacia lo que se orientó durante años la producción de aquel estado pensando en ser exportadores mundiales— no valía la pena ni sembrarlo, cuando se levantaron los zapatistas, por los bajos precios internacionales y la competencia de tantos países en el mundo que producen lo mismo. No queda otra solución, como dicen tantos ecologistas, que modernizar lo tradicional, el ejido entre otras cosas, pero respetando y fortaleciendo lo social, es decir, centrando el proyecto en la gente que vive ahí, aunque eso signifique cerrar la frontera a muchos productos de mejor calidad y más baratos. Dar la apariencia de un encierro en el autoconsumo no puede ser descartado si, como dicen los ambientalistas, ello permite un desarrollo sustentable. ¿Podría ensayarse un régimen de excepción que permita la reconstrucción social de México, no sólo en el campo sino también en las ciudades?

Regresamos así al problema del *modelo nacional* de desarrollo y en esa medida a la cuestión del *control del estado*. En esto, de nuevo, los zapatistas del EZLN no tenían otra posibilidad que plantear desde el principio (*Primera Declaración de la Selva...*), como una cuestión central, el asunto de las elecciones y de la democracia en el país, es decir, el problema nacional-estatal, aunque con ello irremediablemente quedaron inscritos en la dinámica mexicana, la que hace imposible pensar en soluciones "técnicas" circunscritas a la región (en este caso a Los Altos y Las Cañadas chiapanecas): es enorme la inercia que nos empuja hacia los grandes problemas, hacia los temas del modelo global de desarrollo y del tipo de estado que se quiere; dramática resulta la dinámica de las luchas sociales en México y éste es un ejemplo muy claro: surgiendo de lo más enraizado del indigenismo y teniendo como uno de sus objetivos la autonomía de las etnias, entra en una dinámica que la conduce a la acumulación de fuerzas en todo el país, a la lucha contra el estado, a convertirse en un actor nacional de grandes dimensiones o ser arrinconado, empujado y olvidado en la selva.

El rol del estado

X El día 9 de febrero de 1995 Zedillo tomó la decisión temeraria de romper la tregua con el EZLN. Con una cierta perspectiva en el tiempo podemos rearmar los pedazos y entender por qué el presidente tomó esta medida. El asunto interesa en este artículo porque puede modificar rotundamente el escenario sociopolítico nacional. ¿Por qué Zedillo rompió la tregua con el EZ, arriesgándose incluso a pagar el costo de la radicalización social (había que ver la furia de los jóvenes al grito de "todos somos Marcos", durante las manifestaciones que sucedieron a esa desafortunada declaración), y destrozando de plano el Acuerdo Político Nacional firmado apenas en enero por todos los partidos para hacer frente a la crisis económica que estalló en diciembre de 1994 y que provocó una devaluación del peso frente al dólar de 60 o 70%? El zedillismo, dijeron Cárdenas y el dirigente perredista Muñoz Ledo en aquellos actos masivos, se descara como un régimen bi-

**Las
consecuencias
de la
ruptura de
la tregua**

partidista de estado: PRI-PAN. Y es que el procurador de justicia de la República, quien giró las órdenes de aprensión contra Marcos y la dirigencia zapatista, es un miembro del partido Acción Nacional, a quien Zedillo había invitado sólo cuarenta días antes a formar parte de su gobierno.

Setenta y dos horas después de giradas esas órdenes de aprensión, el dispositivo se encontraba perfectamente clarificado: un diálogo y un acuerdo políticos con el zapatismo tal como se encontraban las posiciones militares entre el Ejército Zapatista y el Ejército Federal hasta el 9 de febrero no era aceptable para el presidente Zedillo y para las Fuerzas Armadas (y seguramente tampoco lo era para las clases dominantes regionales, el empresariado nacional y las instituciones financieras nacionales e internacionales). Tal acuerdo hubiera implicado reconocer de alguna manera el control por parte de esas fuerzas sobre un área importante del territorio chiapaneco, en la que se había promulgado la autonomía de los municipios indígenas y se comenzaba incluso a recaudar impuestos para el gobierno paralelo del candidato perredista a la gubernatura de Chiapas, Amado Avendaño.

En menos de cien horas de rota la tregua la situación cambió radicalmente: ahora el EZLN se encontraba replegado en el interior de la selva Lacandona, mientras el Ejército mexicano estableció su control militarizando los municipios autonomistas. Gracias al cerco militar estricto, durante cuatro días fue posible limpiar los rastros de la violencia que conlleva una ocupación de este tipo, a lo que se adjuntó el control férreo de la televisión, la radio y una parte mayoritaria de la prensa, que difundieron un mensaje apaciguador, de "respeto irrestricto a los derechos humanos". La coyuntura de las elecciones para el gobierno del estado de Jalisco fue bien aprovechada y, al no echarse a andar la maquinaria del fraude, el triunfo del Partido Acción Nacional (centroderecha) fue presentado a la opinión pública por los medios de comunicación como un signo de respeto por parte del régimen hacia los procesos electorales. Un último elemento se agregó a las medidas "suavizantes" del trauma militarizador: la renuncia del gobernador chiapaneco priísta Robledo, que constituía una

condición del EZ para reiniciar el diálogo (que, dada la nueva geografía militar, podría ser restablecido aunque durante *un buen tiempo sólo como promesa*, para atajar la avalancha de críticas nacionales e internacionales por el empleo de la fuerza). El sacrificio del gobernador pretendió tener otro rebote: pedir la renuncia del obispo Samuel Ruiz, bajo cuya autoridad moral se mantuvo, al menos durante 14 meses, la cohesión de las fuerzas democráticas.

Visto así, el operativo pareció constituir un éxito rotundo. Sin embargo, el costo no fue bajo de ninguna manera, pues el resultado que se obtuvo fue la militarización de una parte del territorio mexicano y el peligro de que esas fuerzas se eternizaran ahí para asegurar que los grupos populares-campesinos-indígenas no pudieran retomar los predios y los palacios municipales. Es decir: el Ejército había pasado a ser el garante del *statu quo*.

Como se ha puesto de manifiesto en otros países latinoamericanos, el control militar y la destrucción de las intermediaciones civiles acarrea costos insospechados, al tiempo que aleja la solución en torno a los problemas sociales que dieron pie a dichos levantamientos armados. En efecto, si tomamos los ejemplos de Guatemala y Perú, los otros dos países con indigenismo profundo y guerra campesina, podremos constatar (Kruijt, 1994) que en la persecución de la guerrilla los presidentes fueron convertidos prácticamente en rehenes de sus fuerzas armadas, terminaron inevitablemente siendo asesorados por intelectuales y políticos del Ejército. La sorpresiva elección del presidente Fujimori y la debilidad consecuente de su plan de gobierno lo convirtieron en huésped del Círculo Militar.

En México, al menos hasta los primeros dos meses de 1995, no se había establecido una situación de guerra prolongada y la sociedad civil mexicana se había mantenido firme tratando de evitarla. Lo que no nos había quedado claro es hasta dónde el gobierno de este país ha estado también intentando alejarse de ese escenario. Los días que sucedieron a la ruptura unilateral de la tregua chiapaneca a comienzos de febrero, y sus pretextos infundados, nos pusieron a temblar porque constituyen *de facto* la entrega del conflicto del sureste a las fuerzas armadas y parecen

**Militarismo y
poder civil**

acompañarse del desmantelamiento, o del retraimiento al menos, de los actores políticos y de la sociedad civil (comenzando por la iglesia progresista, a juzgar por los ataques físicos incluso para el obispo Samuel Ruiz). Sin estos actores, es impensable la reconciliación y la reconstrucción: en Ayacucho, por ejemplo, la autoridad de las universidades dio paso a los comandos militares, la iglesia católica a los liderazgos evangélicos atomizados, el sector público y la burocracia regional se desdibujó en fundaciones privadas, los grandes comerciantes en mafias coquearas y los comuneros indígenas se convirtieron en rondas campesinas autoarmadas.

Con los zapatistas arrinconados en la selva y en calidad de delincuentes (debido a la orden de aprensión que pesa sobre ellos) y con Samuel Ruiz desvirtuado por el gobierno y los medios, no resulta sincero el llamado del presidente Zedillo a reiniciar las negociaciones de paz, un llamado amplificado por los medios de comunicación, esperando un titubeo en algún punto para mostrar al EZ como renegado y partidario de la violencia. Este era el escenario sociopolítico de nuestra nación, al menos hasta los primeros meses del año 1995.

**Proliferación
y debilidad
de los
agrupamientos
sociales**

XI Queda una pregunta final en torno a los movimientos sociales y la sociedad civil. Vemos hoy en México una gran activación de la sociedad: hay proliferación de organizaciones sociales de tamaño medio y restringido (ONG's, organizaciones cívicas y electorales, grupos civil-cristianos, organismos de derechos humanos, etc.); vivimos también, cotidianamente, la participación intensa de la sociedad en la calle (tres marchas cercanas a los cien mil participantes cada una en la semana que siguió a la decisión de Zedillo de romper la tregua, e infinidad de marchas y plantones cotidianos en la Ciudad de México, al extremo de haberse llegado, en 1994, al espectáculo increíble de las cien marchas en un solo día...); tenemos, igualmente, el renacimiento de la participación indígena y campesina, que pasó de la apatía, la desorganización y la manipulación totales (recordemos la manera en que en

1993 se aprobó la reforma al artículo 27), al reagrupamiento, la organización autónoma, el repudio a las centrales oficiales y el reordenamiento de sus demandas (sólo en Chiapas, como veíamos, la Central Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas, CEOIC, formada en el mes que siguió al levantamiento zapatista, reúne hasta el presente a cerca de 200 organizaciones locales, pero algo muy parecido sucede en todo el México indígena, hoy organizado alrededor de la Convención Nacional Indígena); tenemos en otro nivel la rebelión de los pequeños y medianos productores agrícolas del centro y del norte del país (El Barzón), que *no tienen* con qué pagar a los bancos debido a la apertura indiscriminada de las fronteras y su baja competitividad frente a los productos agrícolas extranjeros. En el nivel electoral, el Partido Acción Nacional cosecha triunfos en importantes plazas, como Jalisco (que cuenta con la segunda ciudad más importante de México), y en poderosos estados de la frontera norte, así como en el centro farmer y católico del país (El Bajío). La Alianza Cívica de Observación Electoral, en fin, organiza consultas ciudadanas a la manera de plebiscitos, inesperadamente concurridas (a pesar del bloqueo de los medios), interrogando a la ciudadanía sobre si Salinas de Gortari debe ser juzgado por sus malas y hasta corruptas decisiones económicas, si el Ejército mexicano debe parar sus acciones punitivas en Chiapas o si debemos los mexicanos aceptar el préstamo de 50 mil millones de dólares para estabilizar al mundo financiero internacional... ¿No son éstos, acaso, ejemplos claros de movilización social? ¿Hasta dónde, en algunas de estas acciones, podemos hablar de movimientos sociales?

Se llega de esta manera a un punto en el que la discusión se torna difícil. De nuevo la pregunta es la misma: ¿la sociedad se desorganiza o la sociedad se reorganiza? Anotemos algunos elementos para una respuesta a manera de conclusión: sería inocente confundir la imagen de las cien marchas con la idea de fortalecimiento de la sociedad civil desde el momento en que detrás de esas manifestaciones no se está fortaleciendo una intermediación institucional y organizativa ni, al menos en este momento, *se están ru-*

busteciendo actores sociales con cierta continuidad en el tiempo. Lo más lamentable, pero no lo más improbable, sería que ese exceso de participación sin encuadre condujera a la supresión del espacio público por la intervención de las fuerzas represivas. Pero iguales reservas debemos tener en lo que hace a las llamadas organizaciones restringidas o circunscritas de la sociedad civil (ONG's, CEB's, organizaciones cívicas, de derechos humanos etc.); en los países que transitaron por dictaduras militares en el Cono Sur, este tipo, o, digamos, este nivel de reorganización proliferó para luego declinar en el momento en que los regímenes democráticos fueron reinstaurados. Las sociedades se refugian en niveles más restringidos y más defensivos cuando el espacio público es monopolizado por una fuerza muy poderosa o de plano cuando ese espacio es enfriado o suprimido autoritariamente por la fuerza represiva (¿será esta proliferación de las pequeñas identidades defensivas un signo de que México ha entrado, bajo el neoliberalismo, en un estadio de monopolio creciente de lo público desde el estado, de derrota de la sociedad, y que "la vida (asociativa) está en otra parte"? Así lo argumentamos en los primeros apartados de este ensayo.

Sin embargo, ninguno de los argumentos anteriores podría descalificar la presencia de algunas fuerzas con mayor consistencia identitaria y, en algunos casos, con mayor continuidad en el tiempo, como serían el movimiento de los pequeños empresarios agrícolas (El Barzón), y de los votantes panistas, navistas, cristianos y farmers del centro y del norte del país, o el resurgimiento de las organizaciones indígenas que parecen reivindicar con increíble fuerza sus fundamentos culturales (con un potencial distinto según las condensaciones étnicas: los zapotecas del Istmo de Tehuantepec siguen siendo una de las más fuertes), o, en fin, la actividad intensa de aquellas organizaciones con una cultura barrial de muchísimos años, que en el caso del centro de la ciudad de México vino a ser despertada por el terremoto de 1985 y que dio nacimiento a la Asamblea de Barrios y al primer personaje sin rostro anti-neoliberal: Superbarrio. ¿Habría que agregar a esta lista el empresariado mediano y pequeño de la industria mexicana hundido en

deudas con intereses estratosféricos? Todavía no, al menos, hasta el segundo trimestre de 1995.

Tenemos pues varias acepciones, de calidad muy desigual, en esto que se da en llamar emergencia de la sociedad civil y de las movilizaciones sociales, y no todas redundan en el fortalecimiento de los actores colectivos en el plano de lo social, ni en más consistentes formas organizativas, ni en un sistema de intermediaciones sociopolíticas robusto. Las manifestaciones de los ciudadanos en plazas públicas son de naturaleza muy distinta con respecto a la proliferación de ONG's y CEB's, y estas dos a su vez poco tienen que ver con la idea de que entre los años sesenta y los años ochenta la modernización salvaje ha debilitado y desmantelado a los actores de nuestra modernidad inacabada. Es más, los tres niveles referidos pueden coexistir y no se contradicen con la idea de que la matriz societal mexicana (socioeconómica, política y cultural), ha otorgado una gran prioridad al actor estatal a lo largo de toda nuestra historia y se ha caracterizado, concomitantemente, por una erosión constante de los actores colectivos dinamizadores de la sociedad civil (particularmente de los grupos empresariales), debido esencialmente a la presencia de un adversario nacional poderoso y a un inevitable y recurrente desbordamiento de los sectores populares (¿plebeyos?). explicable, como en un círculo vicioso, por el debilitamiento cíclico de los actores intermedios y la ausencia de un orden asegurado en el plano social y no impuesto desde el estado. Este último es el nivel en el que Tocqueville, Gramsci o Barrington Moore pudieron hablar, con toda legitimidad, de estado fuerte, sociedad civil débil y todas las combinaciones posibles (en este último nivel se explica, también, la fortaleza ancestral de los zapotecas del Istmo de Tehuantepec, de los Cristeros y luego los sinarguistas de El Bajío, entre otros. ♦

**La relación
estado-
sociedad
en la historia
de México**

BIBLIOGRAFIA

Aguilar Camín, Héctor (1991): *La guerra de Galio*, Ed. Cal y Arena.

Bennett, Vivianne (1993): "Orígenes del movimiento urbano-popular mexicano: pensamiento político y organizaciones políticas clandestinas (1960-1980)", en *Revista Mexicana de Sociología*, No. 3, IIS-UNAM.

Boucher, Josyane (1990): "La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP)", en Zermeño, Sergio y Aurelio Cuevas (eds.), *Movimientos sociales, democracia emergente y sistema político en México*, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM.

Calva, José Luis, *La Jornada*, 16 de noviembre de 1991.

Kruijt, Dirk (1994): "Guerras étnicas y cogobierno militar", en *La Jornada Semanal*.

Monsiváis, Carlos (1987): *La sociedad que se organiza*, Ed. ERA.

Montemayor, Carlos (1991): *La guerra en el paraíso*, Ed. Diana.

Núñez, Oscar (1990): *Innovaciones democrático-culturales del movimiento urbano-popular*, UAM.

Tironi, Eugenio (1986): "Para una sociología de la decadencia", en *Proposiciones*, No. 12, Santiago de Chile, Instituto SUR.

Tokman, Víctor (1987): "El imperativo de actuar. El sector informal hoy", en *Nueva Sociedad*, No. 90, Caracas.

Zermeño, Sergio, "El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden", en *Revista Mexicana de Sociología*, No. 4, 1989, y "La derrota de la sociedad", en *ibid.*, No. 2, 1993.